

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

Distr. RESTRICTED
CRS/2013/CRP.12

ORIGINAL: SPANISH

THIRD INTERNATIONAL DECADE FOR THE ERADICATION OF COLONIALISM

Caribbean regional seminar on the implementation of the Third International Decade
for the Eradication of Colonialism: first quarter review of developments and trends

Quito, Ecuador
28 to 30 May 2013

STATEMENT BY

THE REPRESENTATIVE OF ARGENTINA

COMITÉ DESCOLONIZACIÓN – SEMINARIO REGIONAL
QUITO, 28-30 de mayo
INTERVENCIÓN

Ante todo, deseo manifestar mi agradecimiento y el de mi Delegación al Gobierno y al Pueblo de nuestro querido país hermano latinoamericano, Ecuador, por su cálida recepción y hospitalidad. Asimismo, aprovecho la presente oportunidad para felicitar al Sr. Embajador Diego Morejón por su reelección como Presidente del Comité Especial de Descolonización, destacando la valiosa labor que ha venido desempeñando en su cargo, labor que la Argentina aprecia especialmente, cual es la promoción de la descolonización en el mundo. Deseo agradecer al Comité por extender una invitación a mi Gobierno para participar de la edición 2013 del Seminario Regional, y reconocer a la Secretaría y a la Unidad de Descolonización por su contribución al cumplimiento de los objetivos de las Naciones Unidas en materia de descolonización, tan cara a los valores que busca promover la República Argentina.

La Argentina regresa a este seminario a renovar su firme compromiso con el proceso de descolonización en el mundo. La descolonización es una tarea que, por su propia naturaleza, no puede sino resolverse caso por caso, como ya se ha reconocido abierta y reiteradamente en el marco de este Comité. Todos los Estados han dado consenso a que cada territorio enlistado reviste particularidades que requieren de una consideración de carácter individual para poder dar cumplimiento acabado a la letra de la Resolución 1514 (XV) de erradicar el colonialismo en “todas sus formas y manifestaciones”. La Argentina aplaude que éste sea el enfoque que la comunidad internacional proclama como metodología de trabajo en materia de descolonización, en consonancia con el espíritu de preservar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La Argentina entiende que el proceso de descolonización es un trabajo que de ninguna manera puede basarse en decisiones unilaterales de las potencias administradoras. Actuar de ese modo significaría socavar las bases legítimas que dan su fundamento a la labor de las Naciones Unidas, delegada funcionalmente en este Comité que nos convoca. El objetivo de que la descolonización sea una tarea encargada a un órgano multilateral tan representativo como lo son las Naciones Unidas, obedece a que en cada caso de descolonización deberán sopesarse dos de los principios fundamentales, cuales son la integridad territorial y la libre determinación. Esta tarea conlleva un tratamiento de la situación histórica, política y jurídica de todos y cada uno de los territorios bajo análisis del Comité, para arribar a una solución adecuada a cada situación particular, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas que se le aplican, y de modo de llevar a cabo esta tarea en forma pacífica, justa y ajustada a los principios del derecho internacional.

La Argentina nota con preocupación que las situaciones de descolonización dan origen a desigualdades. En efecto, en aquellos casos en los que las Naciones Unidas entienden que corresponde aplicar el derecho de libre determinación de los pueblos, suele ocurrir que las potencias administradoras utilizan excusas para demorar el otorgamiento a estos pueblos del reconocimiento de un derecho que la Argentina, como muchos de los países aquí representados, no puede sino honrar habiéndose independizado del dominio colonial.

Asimismo, en los casos de descolonización en los cuales subyace una disputa de soberanía, las decisiones unilaterales de las potencias administradoras buscan, soslayadamente, sostener un statu-quo que actúa en detrimento del objetivo de promover la descolonización, como lo establecen por las resoluciones de las Naciones Unidas para estos casos particulares, lo cual también genera una situación desigual entre la potencia ocupante y aquel país que reclama hace años la restitución de su integridad territorial a través del diálogo, de la paz, de la negociación.

El hecho de que este Seminario se convoque en suelo americano, lleva a la Argentina a reflexionar, nuevamente, acerca del orgullo que nos une a muchos de los países aquí presentes, países que hemos sufrido el colonialismo, y que hemos sabido desarrollarnos como naciones independientes. La Argentina se enorgullece de formar parte de un conjunto de naciones, las suramericanas, que entendiendo su pasado y su herencia común, se han unido detrás del objetivo de erradicar el único y último caso de resabio colonial que aún subsiste en América del Sur, cual es la Cuestión de las Islas Malvinas.

Las Naciones Unidas año a año reiteran que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No solamente todos los Estados han reconocido la existencia de esta disputa ya centenaria. También se trata de que existe un mandato de resolverla, cuanto antes, negociadamente.

Podremos aquí debatir sobre qué significa "a la brevedad posible". Pero 180 años parecen ser suficientes, y son los que han transcurrido desde que tuvo lugar la ilegítima ocupación de los archipiélagos del Atlántico Sur que la Argentina heredó, con justicia, de España por aplicación del principio del *uti possidetis iuris*. Derechos consolidados, a su vez, por el desarrollo de continuos y reiterados actos jurisdiccionales de nuestra República desde el momento mismo de su independencia.

No habiendo consentido nunca esta ocupación, la Argentina reclamó constantemente al Reino Unido su acto ilegítimo y contrario a todos los acuerdos internacionales de la época, en los cuales éste reconocía que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, formaban parte del área bajo jurisdicción de España desde las primeras delimitaciones del "Nuevo Mundo". Tampoco reclamaron los británicos los numerosos actos administrativos de la Argentina sobre las Islas del Atlántico Sur, que comprendieron desde la designación de gobernadores hasta el desarrollo de actividades tan prácticas como la sanción de legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. Cabe destacar que Gran Bretaña no manifestó pretensión alguna sobre las mencionadas islas en el proceso de reconocimiento del Estado argentino que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825.

En enero de 1833, una corbeta de la Marina Real británica, haciendo uso de la fuerza, exigió la rendición y entrega de la plaza y expulsó a las autoridades legítimamente radicadas, no permitiendo su retorno. La ilegítima ocupación de las islas del Atlántico Sur sobre las cuales la Argentina ejercía pacíficamente su jurisdicción se enmarca en un período de expansión colonial británico en distintos puntos estratégicos del mundo, particularmente en el Atlántico Sur. A modo de ejemplo recordamos que en 1806/1807 el Reino Unido invadió la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo año, desembarcó en

Ciudad del Cabo, punto extremo Sur del continente africano. En 1810, pocos años después, anexionaron la isla portuguesa Tristán da Cunha, y también tomaron control de la Isla Mauricio, en el Océano Índico. En 1815 el Reino Unido estableció una guarnición en la isla descubierta por Portugal, Ascensión, estratégicamente ubicada en el centro del Océano Atlántico. En 1833, tuvo lugar la ocupación británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, un año antes de que el Reino Unido tomara el control de la Isla de Santa Helena, también ubicada en el Atlántico Sur. En esa década el Reino Unido incursionó en las costas del Mar Caribe. Pocos años después, llegaría la fundación de la colonia británica de Nueva Zelanda, la ocupación de Shanghai y la fundación de una colonia británica en Hong Kong, todos puntos estratégicos ubicados en el Pacífico.

Volviendo a la Cuestión Malvinas, al propio tiempo que desestimaba las protestas argentinas, el Reino Unido fue conformando una comunidad de pobladores "a medida" en las Islas, instalando en éstas colonos provenientes de la metrópoli, e implementando rigurosas reglas de inmigración, con el objeto de impedir a los argentinos provenientes del continente su ingreso y/o radicación en estos territorios. Este impedimento continúa hasta la fecha. En rigor de verdad, el fin último del Reino Unido es controlar la composición poblacional de las islas a fin de justificar la expresión de derechos inexistentes desde el punto de vista del derecho internacional.

El obvio objetivo de esta política es disfrazar la realidad colonial existente en las Islas, realidad que deviene evidente con el sólo hecho de estudiar la ilegítima "normativa" local que configura el ejercicio de los derechos, como por ejemplo, políticos. En las Islas Malvinas el Gobierno de la metrópoli designa un "gobernador", quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como funcionario diplomático del Reino Unido. Para participar de las "elecciones" de los miembros de la ilegítima "Asamblea legislativa" de las Islas, se exige la ciudadanía británica o de los "territorios británicos de ultramar", lo cual ocurre generalmente por tratarse de descendientes directos de personas que ya están encuadradas en esas categorías. La ciudadanía se otorga por una decisión discrecional de las ilegítimas "autoridades" de las Islas. También se requiere de los electores que posean el "estatus de isleño", condición que nunca se define y que también puede ser otorgaba discrecionalmente a través de un acto administrativo ilegítimo.

En cuanto a la posibilidad de adquirir tierras en las islas, aquí también se advierten las inconsistencias en la posición británica. De hecho, sólo los allí residentes pueden adquirirlas. Quienes no lo son deben solicitar un permiso al "gobernador" para poder hacerlo. Son considerados residentes en las islas quienes tienen el "estatus de isleño" mencionado anteriormente, con lo cual, se trata de conceptos indefinidos y circulares, que sólo buscan limitar, de hecho, limitar las opciones. Todo esto está lejos del concepto de una "democracia moderna".

De estas condiciones resulta evidente que las decisiones que se intentan presentar como legítimas para el territorio son, en realidad, tomadas por ciudadanos británicos. La metrópoli ejerce, así, un control directo sobre todas las decisiones que se toman en las Islas Malvinas. Con esa excusa, el Reino Unido se apropia ilegítimamente de recursos naturales renovables y no renovables que le pertenecen a la Argentina, así como despliega su presencia militar en el Atlántico Sur, una zona de paz, esgrimiendo argumentos que sólo esconden sus verdaderas motivaciones.

Es, a todas luces, un caso de una colonia establecida a partir de la ocupación del territorio de otro Estado, la Argentina, y sostenida con un férreo control administrativo y poblacional desde Londres.

Más allá del análisis objetivo que hemos realizado del cual surge claramente la verdad detrás de lo que la propia potencia colonial disfraza como una relación “moderna” y “descentralizada”, la Organización de las Naciones Unidas, a través del trabajo de este honorable Comité, es, como ha definido el Secretario General, el único foro competente para evaluar todas las situaciones coloniales que se le han sometido a su consideración, bajo una metodología “caso por caso”, y fundándose en el respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En el ámbito de este Comité se ha definido a la Cuestión de las Islas Malvinas como un caso colonial “especial y particular”, en el que subyace a la situación colonial que impera en ese territorio la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que debe ser dirimida a través de negociaciones bilaterales entre ambos Estados, con la mayor celeridad posible.

Con la realización de la ilegítima votación en las Islas Malvinas, el propósito del Reino Unido es cambiar el eje del debate en la Cuestión de las Islas Malvinas a través de una masiva operación político-mediática. Bajo la apariencia de un ejercicio de libre expresión de los habitantes británicos de las Islas, el Reino Unido pretende decidir a su favor la controversia de soberanía con la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Se trata de una “puesta en escena” que consiste en utilizar un principio altamente valorado por la comunidad internacional y, por ende, muy atractivo para la opinión pública mundial -la libre determinación de los pueblos- con la pretensión de encubrir un acto de usurpación ejecutado hace 180 años. La maniobra británica no puede ocultar lo evidente: es una votación organizada por británicos, para británicos y con el fin de que digan que el territorio en disputa tiene que seguir siendo británico.

La propaganda británica omite reconocer que el Reino Unido no ha tenido un comportamiento consistente en relación con el principio de libre determinación de los pueblos. Su falaz invocación de este principio en las Islas Malvinas contrasta con su posición en otros casos de descolonización, tal como el del archipiélago de Chagos, donde desarraigó forzosamente a sus habitantes nativos, privándolos, al día de hoy, de su derecho a retornar a sus tierras. Tampoco recabó el Gobierno británico la opinión de los habitantes de Hong Kong cuando restituyó dicho territorio a su legítimo titular, la República Popular China. Ni pareció tomar en cuenta la voluntad de las autoridades democráticamente elegidas de Turcas y Caicos en 2009, cuando haciendo uso de los poderes que le confiere la administración “moderna” colonial, suspendió la administración local del “gobierno” para transferirla al “gobernador” británico residente en dicho territorio.

No sólo la República Argentina ha denunciado esta maniobra política. Los países de la región han rechazado la celebración de esta ilegítima consulta a través de las declaraciones del ALBA, MERCOSUR y UNASUR, afirmando que la misma no alterará la esencia de la Cuestión Malvinas y su resultado no pondrá fin a la disputa de soberanía.

Me permito recordar que a pesar de los intentos británicos de desvirtuar el carácter de la disputa, las propias Naciones Unidas han determinado la no aplicabilidad del principio de autodeterminación al caso que nos atañe. Vale recordar que en 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó el intento británico de introducir el principio de libre determinación en la resolución correspondiente, dejando en claro la no aplicación de este principio en la Cuestión de las Islas Malvinas. Aún a pesar de la determinación de las Naciones Unidas, el Reino Unido continúa imponiendo su propio parecer, ignorando la opinión del resto de los miembros de dicha organización.

La Argentina no tiene dudas de sus derechos legítimos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Aún así, la Argentina, como no puede ser de otra manera en el caso de un país comprometido con los valores que dan base al sistema de las Naciones Unidas, ha decidido someterse al mandato del Comité Especial de Descolonización y acatar la letra de sus resoluciones. La Argentina está dispuesta a dar cumplimiento al llamamiento de la comunidad internacional en la Cuestión de las Islas Malvinas, prioridad nacional para el Estado argentino y en el cual está en juego la propia integridad territorial de nuestra nación. La Argentina se aviene a respetar el modo que las Naciones Unidas han identificado como único válido para solucionar esta disputa, cuya subsistencia en el tiempo no hace sino dejar en evidencia la irresponsabilidad y la arrogancia de un Estado que, siendo uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decide unilateral e ilegítimamente inventar sus propios mecanismos de resolución de una disputa para la cual toda la comunidad internacional determinó ya su modo de resolución.

La Argentina se pregunta qué responsabilidades le resultan oponibles al Reino Unido como potencia administradora de 10 de los 17 territorios no autónomos bajo consideración de este Comité, cuando con su accionar decide unilateralmente otorgar a algunos de dichos territorios el derecho a la libre determinación aún si toda la comunidad internacional está convencida de lo contrario, y negarle a los demás este derecho, cuando a todas cuentas les resultaría aplicable.

A pesar de lo frustrante que puede resultar enfrentarse a la prepotencia de una potencia administradora, al doble estándar que ésta propone para la aplicación del derecho de la libre determinación para manipular una cuestión prioritaria en la agenda internacional como lo es la descolonización, amparándose en una alegada protección de derechos humanos que interpreta a su conveniencia según cada caso, la Argentina encuentra ánimo en que su causa ha seguido ganando cada vez más apoyo. Hoy la causa argentina es una causa latinoamericana, una causa caribeña, una causa africana. Así ha quedado plasmado en las declaraciones adoptadas en las Cumbres de la CELAC, ALBA y ASA. El llamamiento a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido se oye en todos los continentes a través de diversos foros, como el G77 y China, la OEA y las Naciones Unidas todas, representadas en este Comité.

El Gobierno argentino reafirma los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de nuestro territorio nacional. El Gobierno argentino reafirma su compromiso con los valores que de la Carta de las Naciones Unidas. Declara su solidaridad con los pueblos sometidos a subyugación y dominación extranjera, instando a que se les reconozcan los derechos

que les asisten. El Gobierno argentino también reafirma su compromiso con los intereses de todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, continental e insular. Y espera con ansías que el Reino Unido se avenga a dar cumplimiento a lo mandado por la comunidad internacional, absteniéndose de constituirse en el Estado que facilita la perpetuación del colonialismo en sus diversas formas y manifestaciones.

DECOLONIZATION COMMITTEE – REGIONAL SEMINAR
QUITO, 28 to 30 May
INTERVENTION

First of all, I would like to convey my appreciation, and that of the Delegation of my Government, to the People of our beloved Latin American sister nation, Ecuador, for their warm welcome and hospitality. I would also like to take this opportunity to congratulate Ambassador Diego Morejón on his re-election as Chairman of the Special Committee on Decolonization, and to highlight the valuable work he has done in such capacity, which Argentina particularly appreciates: the promotion of decolonization in the world. I would like to thank the Committee for inviting my country to participate in the 2013 Regional Seminar, and I would also like to recognize the Secretariat and the Decolonization Unit for their contribution to the fulfilment of the goals of the United Nations with respect to decolonization, an issue that is highly relevant to the values the Argentine Republic aims to promote.

Argentina has returned to this seminar to reiterate its firm commitment to the process of decolonization in the world. Decolonization is a challenge that, given its very nature, can only be tackled on a case by case basis, as has been openly and repeatedly recognized within the framework of this Committee. All States have agreed that each listed territory has particular characteristics that require an individual analysis in order to fully comply with Resolution 1514 (XV), aimed at eradicating colonialism in “all its manifestations”. Argentina welcomes the approach that the international community has adopted as its working method on decolonization, which is in line with the aim of preserving the purposes and principles of the Charter of the United Nations.

Argentina understands that the decolonization process is an endeavour that in no case can be based on unilateral decisions adopted by the administering Powers. Such an approach would undermine the legitimate principles that are the foundation of the work carried out by the United Nations, which has been delegated to the Committee that brings us together today. The task of decolonization has been entrusted to a multilateral organization as representative as the United Nations in order to balance, in each case of decolonization, two of its fundamental principles – territorial integrity and self-determination. Such a task implies considering the historical, political and legal background of each and every territory being analyzed by the Committee, in order to find an appropriate solution for each specific case in accordance with applicable UN resolutions and with a view to fulfilling this task peacefully, fairly and in compliance with international law.

It is with concern that Argentina observes the inequalities that arise from decolonization situations. Indeed, in cases in which the United Nations consider that the right to self-determination of peoples should be exercised, administering Powers usually resort to excuses aimed at delaying the acknowledgement of a right that Argentina makes its duty to respect, just as many of the other countries represented herein that have also gained independence from colonial rule.

Moreover, in decolonization cases in which there is an underlying sovereignty dispute, unilateral decisions are adopted by administering Powers with the concealed purpose of maintaining the *status quo*, and to the detriment of the promotion of decolonization, as provided for in UN Resolutions for these cases. This also creates a situation of inequality between occupying powers and countries that for years have been claiming for the restitution of their territorial integrity through dialogue, peace and negotiations.

The fact of holding this seminar in the Americas reminds Argentina, once again, of the pride that many of the countries present here today take in for having struggled against colonialism in order to grow as independent nations. Argentina is proud to be part of a group of nations – South American nations – that have come together, based on the understanding of their past and shared history, with the goal of eradicating the last and only remaining case of colonialism in South America: the Question of the Malvinas Islands.

Every year, the United Nations reiterate that the special and particular case of colonialism in the Malvinas Islands can only come to an end through the peaceful and negotiated settlement of the sovereignty dispute between the governments of the Argentine Republic and the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Not only have all States recognized the existence of this century-long dispute, but also there exists a mandate to resolve it as soon as possible through negotiations.

The meaning of “as soon as possible” could be discussed. However, 180 years seems to be enough time. This is the time that has passed since the British illegitimately occupied the islands in the South Atlantic that Argentina had rightfully inherited from Spain by virtue of the *uti possidetis juris* principle. Argentina’s rights over the islands have been consolidated by the continuous and reiterated acts of jurisdiction it has engaged in ever since its independence.

Argentina never consented to the occupation of the islands, and constantly protested against the illegitimate measures adopted by the United Kingdom, which were against all international agreements then in force, by virtue of which the UK acknowledged that the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands, as well as the surrounding maritime areas, were under Spanish jurisdiction ever since the first delimitations of the “New World”. In addition, the British did not oppose the several administrative acts carried out by Argentina in connection with the South Atlantic Islands, which ranged from the appointment of governors to the implementation of practical measures such as the passing of laws on fishery resources and the granting of territorial concessions. It should also be noted that Great Britain did not make any claim over these islands during the process of recognition of Argentina, which led to the execution of the Treaty of Friendship, Trade and Navigation of 1825.

On 3 January 1833, however, a corvette of the British Royal Navy forcefully demanded the surrender and handover of the settlement, expelling the authorities that had been legitimately established there, and preventing their return. The illegitimate occupation of the South Atlantic islands, over which Argentina peacefully exercised its jurisdiction, took place at a time of British colonial expansion in different strategic parts of the world, particularly in the South Atlantic. By way of example, let us remember that, in 1806/1807, the UK invaded the city of Buenos Aires. In that same year, the UK disembarked in Cape Town, the southernmost point of the African continent. A few

years later, in 1810, the UK annexed the Portuguese island of Tristan da Cunha, and also took control of Mauritius, an island in the Indian Ocean. In 1815, the UK set up a garrison town in Ascension, an island discovered by Portugal that is strategically located in the middle of the Atlantic Ocean. In 1833, the British occupied the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands, a year before taking control of the Island of Saint Helena, also located in the South Atlantic. During that decade, the United Kingdom also explored the coasts of the Caribbean. A few years later, the British colony of New Zealand was founded, Shanghai was occupied and a British colony was settled in Hong Kong. All of these were strategic points in the Pacific Ocean.

Turning to the Question of the Malvinas Islands, the United Kingdom, while dismissing the Argentine claims, started shaping a “tailored” colony in the Islands by bringing settlers from the British Isles and implementing rigorous immigration rules aimed at preventing the entry and/or settling of Argentine citizens from the American continent. These prohibitions are still in force today. Indeed, the ultimate goal of the United Kingdom is to control the population composition of the islands in order to justify the implementation of non-existent rights allegedly based on international law.

The obvious purpose of this policy is to disguise the actual colonial situation of the Islands, which can be clearly observed by analyzing the illegitimate local “rules” governing the exercise of rights such as, for example, political rights. The “governor” appointed to the Malvinas Islands by the British Government was, until recently, a diplomatic officer of the United Kingdom. In order to participate in the “election” of the members of the illegitimate “Legislative Assembly” of the Islands, voters have to be British nationals or citizens of a “British Overseas Territory”, which is generally the case given that islanders are direct descendants of persons who are already within either of these categories. Citizenship is granted at the discretion of the illegitimate “authorities” of the Islands. Voters are also required to hold the status of “Falkland Islander”, a status which has not been defined and which is also granted through a discretionary and illegitimate administrative act.

Access to land in the islands also brings to light the inconsistencies of the British position. Indeed, only residents of the islands can purchase land. Non-residents must request a permit from the “governor” to do so. In order to be a resident of the island, a person has to hold the abovementioned status of “Falkland Islander”. These concepts are vague, self-referential and aimed at limiting options. All of this is far removed from the concept of “modern democracy”.

These circumstances clearly demonstrate that the decisions presented as being legitimately adopted by the territory are, in fact, adopted by British citizens. In this way, the United Kingdom exerts its direct control over all the decisions adopted in the Malvinas Islands. The United Kingdom uses this excuse to illegitimately exploit renewable and non-renewable natural resources that belong to Argentina, as well as to deploy its military forces in the South Atlantic – a peaceful area – under arguments that only hide its real intentions.

It is clearly a case of a colony established through the occupation of the territory of another State, Argentina, and maintained through tight administrative and population control from London.

Aside from the objective analysis that we have carried out, which clearly reveals the truth behind what the colonial power itself masquerades as a “modern” and “decentralized” relationship, the United Nations Organization, through the work of this honourable Committee, is, as defined by the Secretary-General, the only competent forum for assessing all colonial situations that have been submitted for its consideration on a case-by-case basis, and relying on the respect for the purposes and principles of the UN Charter. Within the framework of this Committee, the Question of the Malvinas Islands has been defined as a “special and particular” colonial case, in which the existence of a sovereignty dispute between Argentina and the United Kingdom underlies the colonial situation that prevails in that territory. Such a dispute is to be settled through bilateral negotiations between both States as soon as possible.

With the illegal voting on Malvinas Islands, the purpose of the United Kingdom is to shift the focus of the debate on the Question of the Malvinas Islands through a massive political-media stunt. Under the appearance of a free exercise of freedom of expression by the British inhabitants of the islands, the United Kingdom intends to decide in its favour on the sovereignty dispute with Argentina over the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas.

This is a “mise-en-scène” that consists in using a principle highly valued by the international community and, therefore, very attractive to world public opinion – the free determination of peoples – with the aim of covering up the usurpation carried out 180 years ago. Britain’s manoeuvre cannot hide the obvious: it is a voting process organized by the British, for the British and for them to say that the disputed territory must remain British.

Britain’s propaganda fails to recognize that the United Kingdom’s conduct has not been consistent in relation to the principle of free determination of peoples. Its fallacious invocation of this principle in the Malvinas Islands is in contrast to its position on other decolonization cases, such as the Chagos archipelago, where it forcefully banished the native inhabitants, depriving them to this day of their right to return to their land. The British Government also failed to consider the opinion of the inhabitants of Hong Kong when it returned that territory to its legitimate owner, the People’s Republic of China. It also did not seem to take into account the will of the democratically-elected authorities of Turks and Caicos in 2009, when, relying on the powers conferred on it by the colonial “modern” administration, it suspended the “government’s” local administration in order to hand it over to the British “governor” residing in that territory.

It was not only the Argentine Republic that denounced this political manoeuvre. Countries of the region have rejected the holding of this illegitimate referendum through ALBA, MERCOSUR and UNASUR declarations stating that the referendum does not alter the essence of the Malvinas Question and that its outcome will not put an end to the sovereignty dispute.

It is worth noting that, despite Britain’s attempts to undermine the nature of the dispute, the United Nations itself has decided that the self-determination principle does not apply to this case. It should be recalled that in 1985, the United Nations General Assembly rejected Britain’s attempt to introduce the principle of self-determination in the appropriate resolution, thus making it clear that this principle does not apply to the Question of the Malvinas Islands. Even despite the UN’s decision, the United Kingdom

continues to impose its own views, ignoring the opinion of the rest of the members of the organization.

Argentina has no doubt about its legitimate sovereignty rights over the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands, and the surrounding maritime areas. Yet, Argentina, as can only be expected of any country committed to the values that underpin the UN system, has decided to submit to the mandate of the Special Committee on Decolonization, and comply with its resolutions. Argentina is willing to comply with the international community's call on the Question of the Malvinas Islands, which is a national priority for the Argentine Government, and in which the territorial integrity of our nation is at stake. Argentina agrees to respect the manner that the UN has identified as the only valid one for resolving this dispute, whose subsistence over time lays bare the irresponsibility and arrogance of a State that, as one of the permanent members of the UN Security Council, decides unilaterally and illegitimately to make up its own resolution mechanisms for a dispute regarding which the entire international community has already decided on the manner of resolving it.

Argentina wonders what responsibilities are incumbent on the United Kingdom as administering power of 10 of the 17 non-autonomous territories subject to the consideration of this Committee, when it unilaterally decides, through its acts, to grant to some of those territories the right to free determination, even if the entire international community is convinced of the contrary, and denies others this right, when it would be applicable under any circumstance.

As frustrating as it is to deal with the arrogance of an administering power, the double standard it pursues for the application of the right to free determination in order to manipulate a priority matter on the international agenda such as decolonization, relying on an alleged protection of human rights that it interprets in its favour in every case, Argentina is encouraged by the fact that its cause has gained more and more support. Today, Argentina's cause is a Latin American cause, a Caribbean cause, an African cause. Indeed, this has been expressed in declarations adopted at the CELAC, ALBA and ASA summits. The call for negotiations to be resumed between Argentina and the United Kingdom is heard on all continents through several forums, such as G77 plus China, the OAS and the UN, all of which are represented on this Committee.

The Argentine Government reaffirms the imprescriptible sovereignty rights of the Argentine Republic on the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas, which are an integral part of our national territory. The Argentine Government reaffirms its commitment to the values of the UN Charter. It expresses its solidarity with the peoples suffering foreign subjugation and domination, and urges that the rights to which they are entitled be recognized. The Argentine Government also reaffirms its commitment to the interests of each and every inhabitant of our territory, both in the mainland and in our islands. It also looks forward to the United Kingdom agreeing to comply with the mandates of the international community, refraining from becoming a State that perpetuates colonialism in its various forms and manifestations.